

## PRIMERO DE MAYO, COMPROMISO DE TODA LA SOCIEDAD

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Conmemoramos un nuevo *Primero de Mayo* encontrándonos en la encrucijada de un contexto geopolítico y económico, ciertamente, complejo e incierto. Nos sacuden, día tras día, las noticias sobre la infame invasión rusa de Ucrania y sus, cada vez más graves e imprevisibles, consecuencias humanitarias, económicas y sociales para el conjunto de los países europeos y, por supuesto, también para España y la Región de Murcia.

La más inmediata de esas consecuencias ha sido el vertiginoso encarecimiento de la electricidad y los hidrocarburos, y el traslado de las tensiones inflacionistas de estos productos a otros bienes y servicios esenciales. Algo que está empobreciendo a pasos agigantados a las personas trabajadoras que, como consumidores finales, careciendo de la posibilidad de repercutir estos incrementos, tienen que asumirlos sin más remedio y, en el caso de las más humildes, solo pueden contrarrestarlos consumiendo menos.

Por eso, la alta inflación, unida a un nivel salarial tan bajo como el que existe en nuestro país y en nuestra Región (donde se estima que en torno al 19% de las personas ocupadas están, pese a tener un empleo, en riesgo de pobreza) es un mazazo para el poder adquisitivo de la mayoría de las familias, lo que, sin duda, tampoco es una buena noticia para las empresas o nuestra economía, dado que dependen, en gran medida, de lo que aporta el consumo de los hogares a la demanda interna.

Se entiende mal, en estas circunstancias, que sea a los salarios, a los únicos que se pide “moderación”, mientras las empresas mantienen sus márgenes comerciales y, algunas de ellas, incluso, aprovechan la coyuntura para especular con el precio de sus productos. Se entiende aún peor, que las organizaciones empresariales no dejen de obstaculizar, irresponsablemente, la renovación del Acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva, oponiéndose a la inclusión de cláusulas de revisión que son irrenunciables para salvaguardar, como mínimo, el poder adquisitivo de los salarios reales y para no generar más desigualdad y pobreza.

Cabe recordar que, en nuestra Región, tenemos a más de doscientos mil trabajadores y trabajadoras afectados por convenios expirados, muchos de los cuales llevan más de una década sin ver actualizadas sus condiciones salariales y laborales.

Sería ilógico que ahora nos apartáramos del camino que ya habíamos comenzado a trazar, tanto en Europa como en nuestro país, para dar carpetazo, definitivamente, a las viejas y fracasadas recetas neoliberales de austeridad y recortes sociales y laborales. Y es que, si algo se podía sacar en positivo de la pandemia, después de tanto sufrimiento como ha causado, es que parecía haber abierto los ojos de todos respecto a la importancia de cuidar nuestros sistemas sanitario, educativo y de cuidados sociales, de reconducir las políticas al Diálogo Social, de priorizar el mantenimiento del empleo y la protección de las rentas de la ciudadanía, y de utilizar las inversiones y los apoyos públicos para transitar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, tecnológico, inclusivo y resiliente.

Un camino que ya había empezado a demostrar su eficacia con medidas que hemos impulsado las organizaciones sindicales, como la implantación del Ingreso Mínimo Vital, la utilización de los ERTES en sustitución de los despidos como medida de ajuste, la progresiva elevación del SMI o los acuerdos alcanzados en materia de pensiones y mercado de trabajo, que nos han permitido

iniciar una pronta recuperación de la economía y el empleo, tras una crisis sin precedentes, y hacerlo, además, incorporando mejoras tangibles para la mayoría de las personas trabajadoras.

También en Europa se iniciaba nuevo rumbo político: a diferencia de lo ocurrido con la crisis de 2008, ante la pandemia, las instituciones europeas han adoptado un enfoque mucho más mancomunado y social, mucho más cercano a las posiciones sindicales. Son, sin duda, buenos ejemplos de ello, la aprobación del mecanismo SURE para sufragar los ERTES o el acuerdo en torno a un Plan de Recuperación que se ha significado como el mayor paquete de estímulo jamás financiado por la Unión, y todo ello, sin los condicionamientos de austeridad extrema que tan profundas brechas sociales y desafección al proyecto europeo generaron en el pasado.

Por eso, la lentitud e insuficiencia de las respuestas que se están dando ahora al problema de la inflación y las consecuencias de la guerra (en un contexto en el que urge entender de nuevo como prioridad el mantenimiento del empleo y la protección de las rentas de las personas trabajadoras), amenazan con echar por tierra todos estos avances.

Hemos querido, en consecuencia, centrar la atención de este *Primero de Mayo* en la necesidad de arbitrar medidas decididas y valientes que contengan la factura energética de las familias y la industria, y que protejan, a un tiempo, el poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y el conjunto de prestaciones sociales. Pero no nos olvidamos, en ningún caso, de todo lo que en paralelo nos queda por conseguir: la reconstrucción de nuestro Estado de Bienestar tras una década de recortes, una reforma fiscal integral y estructural que abunde en la progresividad y la redistribución equitativa de la riqueza, la culminación y modernización de un nuevo marco jurídico laboral llamado a abordar los retos que impone la digitalización y la necesaria ecologización de nuestra economía y, muy particularmente, una integración laboral sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, sin exclusión.

Sigamos sosteniendo la movilización y el diálogo social de estos años, que han demostrado cuánto y para qué sirven.

***Antonio Jiménez Sánchez es secretario general de UGT de la Región de Murcia***